



OPINIÓN

**ISRAEL GONZÁLEZ
DELGADO**

NOTA AL PIE

La incómoda relación entre la democracia y el dinero

La democracia representativa enfrenta una paradoja incómoda que nadie quiere admitir públicamente: mientras más se proclama su igualitarismo, más depende del dinero para sobrevivir. Los candidatos modernos necesitan recursos cada vez mayores para competir en un entorno mediático saturado de estímulos agresivos y permanentes. Una campaña sin financiamiento es, sencillamente, invisible. Pero aquí radica el problema: esa dependencia económica ha convertido a nuestros sistemas electorales en máquinas de despilfarro donde el dinero informal fluye sin obstáculos.

Aunque no hay estudios con demasiada seriedad sobre el tema, casi todos los analistas aceptan que por cada peso que oficialmente se usa en las campañas electorales, hay muchos más que se gastan por debajo de la mesa. Las revelaciones que documentan transferencias en efectivo vinculadas a funcionarios públicos y gobernadores, incluso aquellas célebres como la de Bejarano y las ligas, o la de los sobres amarillos para financiar "el movimiento" no son una excepción, sino una regla donde la legislación electoral va por un lado y las necesidades políticas reales van por otro.

¿Cómo llegamos aquí? La respuesta es perversa: las legislaciones electorales cada vez más restrictivas en topes de gasto han generado el efecto contrario al deseado. Al establecer límites legales, los partidos no renunciaron al dinero; simplemente aprendieron a ocultarlo. Y aquí entra el verdadero problema: a quién le sobra dinero imposible de rastrear. Las respuestas son aterradoras. El crimen organizado posee flujos de efectivo que necesita legalizar, mientras que los grandes actores económicos informales —desde empresarios sin regulación hasta monopolios grises— cuentan con recursos que no pueden justificar públicamente. Ambos tienen incentivos claros para financiar campañas: acceso al poder, impunidad y favores legislativos.

Este es el verdadero negocio. No se trata de corrupción incidental, sino estructural. Cuando un candidato recibe dinero ilegal, adquiere una deuda que pagará con decisiones legislativas, nombramientos o simplemente mirando hacia otro lado. Y los alcaldes, peor, porque pueden pagar con contratos de obra. El crimen organizado no financia campañas por patriotismo; lo hace porque sabe que ese dinero invertido en política le garantiza mercados protegidos, autoridades cooptadas y debilitamiento de instituciones.

Ahora llegamos a las reformas electorales, ese espectáculo tedioso que se repite cada tanto en México. Prometen transparencia, equidad, justicia electoral. Lo que entregan es un galimatías de fórmulas de asignación de escaños y diseño de distritos que, casualmente, favorecen al partido que controla la mayoría en el momento de la aprobación. Cuando se vuelven minoría, se quejan y piden contra reforma. La reforma electoral actual no es excepción. Mientras se negocian detalles técnicos sobre representación proporcional y distritos, nadie aborda seriamente el financiamiento ilegal. Es como discutir el color de las cortinas mientras la casa se quema. Genios.

El cinismo es absoluto: se promulgan leyes más estrictas sobre reportes electorales, se crean nuevas instituciones fiscalizadoras, pero los mecanismos que permitirían rastrear dinero ilegal permanecen intactos. Los candidatos seguirán recibiendo sobres amarillos, transferencias internacionales, depósitos en efectivo. Las autoridades electorales seguirán simulando sorpresa. Y la economía informal (legal e ilegal), que supuestamente es nuestro mayor obstáculo al desarrollo, seguirá siendo el gran donador de nuestra democracia. Y no culpo a la clase política por no querer entrarle a este toro, sí está cabrón.

• Autor y consultor especialista en políticas públicas.

Abogado de la Escuela Libre de Derecho y catedrático universitario. @IsraelGnDelgado